

## TAMAULIPAS

Raymundo Ramos

El pasado 5 de junio de 2016, poco después del mediodía, acudí con mi esposa y dos hijos a votar en una de las 587 casillas instaladas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una noche anterior había pronóstico de lluvias y tormentas, pero finalmente no llovió ni una gota.

Una semana antes las deficiencias que caracterizaban al estado de Tamaulipas en materia de secuestros y desaparición de personas habían quedado atrás con el “rescate” de un conocido futbolista (Alan Pulido) en menos de 24 horas. El gobernador en persona, medio despeinado, acompañado de su gabinete de seguridad pública, presentó al futbolista ante los medios de comunicación “sano y salvo, para que vean que está bien”. Se trató, dijo, de un “operativo de inteligencia”, de una colaboración estrecha entre las autoridades de Tamaulipas y el gobierno federal. Ahora todos sabemos que, en realidad, fue parte de una estrategia maquinada por mentes perversas para influir entre los ciudadanos y posicionar al PRI en las preferencias electorales.

Pero no les funcionó, como tampoco funcionó la guerra sucia en plena campaña electoral en Tamaulipas orquestada desde los más altos niveles de poder político en México, y cuyo autor principal sería el exsenador Manlio Fabio Beltrones.

Mientras me entregaban las tres boletas electorales pensaba en mis familiares, amigos, compañeros de profesión y vecinos que hoy se encuentran desaparecidos o murieron víctimas de una guerra que lleva en

Tamaulipas exactamente 15 años. Ya suman 20,000 víctimas y miles de damnificados, principalmente nuestras niñas y nuestros niños.

Tamaulipas, como bien se sabe, no se reconoce como estado fallido, a pesar de que reúne todas las características de ingobernabilidad. Desde el año 2010 ocupamos los primeros lugares en secuestros, desaparición de personas, homicidios dolosos, extorsiones y agresiones a periodistas. Por ejemplo, en el año 2014 se dieron a conocer cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que permitían conocer una de las realidades más terribles originadas por la violencia. De un total de 22,322 personas registradas como desaparecidas hasta diciembre de 2013, Tamaulipas ocupaba el primer lugar con 4,875 casos, muy por encima de otros estados como Jalisco, con 2,113 o el Estado de México, con 1,554.

Los años de mayor violencia que vivimos en Tamaulipas fueron de 2003 a 2013. Diez años de barbarie, masacres, secuestros y desapariciones cometidos no solamente por integrantes del crimen organizado, sino también por elementos de las fuerzas federales y, por supuesto, de la “Policía Estatal Acreditada”. Pero la violencia tuvo un origen político: la descomposición del régimen priista combinada con la incertidumbre de dos sexenios panistas, atemorizados por una sociedad cada vez más exigente y organizada.

En el año 2000, cuando en todo el país se pensaba que México había transitado a la democracia, luego de la victoria de Vicente Fox contra el priismo tradicional dictatorial; en realidad, se trataba de una liberación de demonios que desplazaron a los caciques tradicionales y regionales para crear grupos o células del crimen organizado hasta conformar grandes cárteles que se atrevieron a retar al Estado mexicano.

Los caciques de antes inicialmente cobraban cuotas sindicales, pero luego comenzaron a vender protección institucional a vendedores de alcohol y cigarros extranjeros, traficantes de ropa, vehículos y aparatos eléctricos, ladrones de poca monta. El crimen organizado eventualmente los desplazó y comenzó a vender protección para cometer secuestros, extorsiones, y controlar la venta de drogas, la prostitución, el tráfico de personas y el tráfico de mercancías extranjeras. Y una de estas señales de cambio, en apariencia inofensiva, fue la apertura de las fronteras al tráfico de armas.

En tiempos de Ernesto Zedillo los semáforos fiscales instalados en los puentes internacionales mandaban a revisión a ocho de cada diez vehículos que ingresaban a nuestro país, procedentes de Estados Unidos. Con Vicente Fox la cantidad se invirtió: a ocho vehículos les tocaban luz verde en el semáforo fiscal y solamente se revisaban dos. La justificación del nuevo mandatario era eliminar la corrupción en las aduanas que lastimaban la economía de nuestros hermanos paisanos y de los habitantes fronterizos. Los responsables de la corrupción jamás fueron sancionados.

Sin embargo, esta apertura de las aduanas aumentó el tráfico hormiga y de gran escala de armas de fuego que comenzaron a llegar a estados con grandes conflictos sociales como Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Veracruz, y ni qué decir de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Jalisco. Cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al crimen organizado y sacó al ejército a las calles aquella mañana del 11 de diciembre del año 2006, más de la mitad del país estaba armado, principalmente los cárteles del narcotráfico. El baño de sangre en el país apenas comenzaba. Al terminar su sexenio, las cifras oficiales hablaban de más de 120,000 personas fallecidas y cuando menos 20,000 desaparecidos.

Aquí, en memoria de esas víctimas correspondientes al estado de Tamaulipas, quiero escribir de algunas de ellas porque siguen presentes en nuestros corazones y en nuestras oraciones.

Roberto Mora García, director de un periódico en Nuevo Laredo, asesinado en marzo de 2004 con 26 puñaladas. Fue una voz crítica del entonces gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por sus nexos con el crimen organizado y a quien hoy las autoridades de Estados Unidos buscan para procesarlo. En México, ninguna autoridad lo busca.

Guadalupe Escamilla, periodista, asesinada en abril de 2005. Recibió catorce impactos de bala de un agresor que nunca fue identificado mientras llegaba de madrugada a la radiodifusora en donde trabajaba.

¿Recuerdan a Martín y Bryan Almanza Salazar, dos niños neolaredenses que iban con su familia a la playa de Matamoros en abril del 2010? Cruzaron un retén militar en Ciudad Mier y luego, de manera inexplicable, un grupo de soldados comenzó a disparar hacia la camioneta en la que

viajaban con su papá, mamá y primos. ¿La versión oficial? Primero, el silencio, el ocultamiento de la tragedia. Luego, la descalificación y el linchamiento mediático, y finalmente la justificación: “quedaron atrapados en un fuego cruzado entre autoridades y delincuentes”. Fueron víctimas “colaterales”, dijo el secretario de la Defensa Nacional.

También recuerdo a doña Cinthia Salazar, madre de los dos niños, cuando se entrevistó con el entonces presidente Calderón en la residencia oficial de Los Pinos: “exijo justicia y una disculpa pública” y, hasta la fecha, seguimos esperando ambas cosas.

En agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados 72 cuerpos: 58 hombres y 14 mujeres. Todos migrantes nacionales y extranjeros centroamericanos. Al menos dos víctimas lograron sobrevivir a esta brutal masacre, por mera gracia de Dios. Las “investigaciones” de las autoridades federales llevaron a la detención de varios presuntos responsables. Pero estas investigaciones en ningún momento tocaron a los funcionarios que eran responsables de proteger a nuestros hermanos migrantes en su travesía por territorio nacional.

¿Cómo era posible secuestrar a más de 70 personas sin que ninguna autoridad se percatara de ello? Ni estatales, ni federales. ¿Cómo funciona entonces la inteligencia nacional? ¿Qué papel desempeñan las autoridades de seguridad pública federal, principalmente aquellas dedicadas a la vigilancia carretera o ferroviaria?

Los 70 migrantes de San Fernando no fueron los únicos secuestrados, decenas de autobuses fueron interceptados por el crimen organizado en diferentes carreteras de Tamaulipas. Hombres, mujeres y niños por igual. Pero el gobierno de Felipe Calderón y de Egidio Torre Cantú guardaron silencio; ocultaron lo que estaba sucediendo hasta que emergió la barbarie.

De hecho, muchos guardaron silencio por miedo, por complicidad, por *valemadrismo*: concesionarios del transporte, periodistas, partidos políticos, las organizaciones religiosas, las universidades, hasta el gobierno de Estados Unidos, que en todo se entromete y, salvo contadas ocasiones, solo emitió alertas para que sus ciudadanos no transitaran por las carreteras de Tamaulipas.

El 27 de enero de 2011, el ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Vaca salió de la Ciudad de México con destino a Laredo, Texas. Manejaba un carro Honda y no llegó. Fue secuestrado cerca de los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, en una carretera federal. Tampoco las autoridades investigadoras lo han podido localizar. Dos meses después, el 27 de marzo, Andrés Ascensión González y Braulio Hernández Bravo salieron de Chignahuapan con rumbo a la frontera de Nuevo Laredo. Fueron interceptados por un grupo de hombres armados saliendo de Reynosa, Tamaulipas. Hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ante ejemplos como estos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C. fue creado en agosto de 1997 para la defensa y promoción de los derechos humanos. La violencia que sacudió a nuestro país en los años que mencioné nos convirtió en acompañantes de dolor, abogados, psicólogos, mediadores y, finalmente, en víctimas.

A la fecha somos la única agrupación que sobrevive en Tamaulipas; y eso, gracias al apoyo, la colaboración y protección de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos como CADHAC, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras. Si no fuera por estas organizaciones hermanas, desde hace muchos años yo estaría preso, exiliado o, en el peor de los casos, muerto.

En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 fuimos víctimas de graves amenazas por parte del ejército y la marina, así como de la delincuencia organizada. Esto nos llevó finalmente a pedir la “intervención” del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lamentablemente, el Poder Judicial y el Poder Legislativo nos han dejado solos en esta lucha contra la injusticia y los abusos de nuestras “autoridades”.

Creo que la gran lección de todo esto es que, con la participación ciudadana de miles de mujeres y hombres valientes en todo el estado, pudimos sacar al PRI del gobierno de Tamaulipas y, con ello, luchar por una nueva era para nuestras familias. Una nueva era en la que la paz y la tranquilidad nos ayuden a superar una década de violencia, dolor y muerte.

